

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022)**

DEMANDANTE	: LIGIA MARGARITA MONSALVE JARAMILLO
DEMANDADO	: COLFONDOS S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO (AUTO)
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-006-2020-00125-01
RADICADO INTERNO	: 178-22
DECISIÓN	: REVOCA AUTO.
ACTA NÚMERO	: 207

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso dentro del proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

**ANTECEDENTES**

La parte demandante instaura proceso ordinario laboral en el que solicita se condene a Colfondos S.A a pagar la devolución de saldos más los rendimientos financieros a que haya lugar con la inclusión del tiempo laborado al municipio de Santo Domingo desde el 01 de noviembre de 1961 al 13 de enero de 1966 y al Inpec desde el 14 de enero de 1966 al 5 de octubre 1972, y se condene al demandado a los intereses moratorios regulados en el artículo 12 del decreto 1748 de 1995 modificado por el artículo 3 del decreto 1474 de 1998 y modificado por el artículo 5° del decreto 1513 de 1998 desde el 8 de noviembre del 2018 y hasta la fecha del pago efectivo de la respectiva liquidación de la devolución de saldos, a la indexación de las anteriores sumas y al pago de las costas del proceso.

Al dar contestación a la demanda Colfondos S.A propuso la excepción previa de FALTA DE INTEGRACIÓN DE LITIS CONSORTE NECESARIO, argumentando para ello lo siguiente:

“A. Dentro del presente proceso se hace necesario la vinculación de la OFICINA DE BONOS PENSIONALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, por cuanto esta entidad es la única entidad autorizada para emitir – redimir bonos pensionales. Siendo así la comparecencia de esta entidad se hace necesaria, como quiera que, si llega a declararse el derecho de la actora al pago del bono pensional, las condenas que se impongan por ese concepto, estarían a cargo de dicha entidad y por ende debe defender sus intereses. El representante legal de la entidad Dr. José Manuel Restrepo Abonado o quien haga sus veces podrá ser notificada en el correo [notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.com](mailto:notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.com).

B. Dentro del presente proceso se hace necesario la vinculación del MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ya que la demandante, menciona que laboró para esta entidad, por lo tanto, es esta entidad la encargada del Pago del Bono Pensional, para que se proceda con la DVS, que incluya el bono pensional, o en dado caso, quien debe responder directamente a la demandante por el tiempo laborado. Siendo así la comparecencia de esta entidad se hace necesaria, como quiera que, si llega a declararse el derecho de la actora al pago del bono pensional, las condenas que se impongan por ese concepto, estarían a cargo de dicha entidad y por ende debe defender sus intereses. El representante legal puede ser notificado al correo electrónico [notificacionesjudiciales@santodomingo-antioquia.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@santodomingo-antioquia.gov.co)

C. Dentro del presente proceso se hace necesario la vinculación del INPEC, ya que la demandante, menciona que laboró para esa entidad, por lo tanto, es esta entidad la encargada del Pago del Bono Pensional, para que se proceda con la DVS, que incluya el bono pensional, o en dado caso, quien debe responder directamente a la demandante por el tiempo laborado. Siendo así la comparecencia de esta entidad se hace necesaria, como quiera que, si llega a declararse el derecho de la actora al pago del bono pensional, las condenas que se impongan por ese concepto, estarían a cargo de dicha entidad y por ende debe defender sus intereses. El representante legal puede ser notificado al correo electrónico [notificaciones@inpec.gov.co](mailto:notificaciones@inpec.gov.co)”.

Ante lo anterior el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, al resolver la anterior excepción en diligencia del 24 de junio de 2022 dispuso lo siguiente:

“**Primero.** Prospera la excepción falta de integración litisconsorte necesario con la Nación- Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del municipio de Santo Domingo y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, propuesta por la AFP Colfondos S.A.

**Segundo.** Ordenar la citación al proceso de la Nación- Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del municipio de Santo Domingo y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec; conceder a cada una de las citadas termino de 10 días a partir de la fecha en que le quede notificada personalmente de la demanda, para que comparezcan al proceso a ejercer su derecho de defensa y contradicción. Para ello se les anexará copia de la demanda, del auto

admisorio, de la respuesta dada por la AFP Colfondos y de audio y acta de esta audiencia.

**Tercero.** La notificación a las citadas al litis consorcio necesario será a cargo de la parte demandante, y conforme las disposiciones del art. 8 de la ley 2213 del corriente año. Para el cumplimiento de lo anterior y la acreditación al proceso, se le concederá término de un mes, a partir de la fecha.

**Cuarto.** Se condena a la demandante señora Ligia Margarita Monsalve Jaramillo y a su apoderado judicial doctor Francisco Alberto Giraldo Luna, a pagar costas a la AFP Colfondos, se liquidarán por secretaria una vez en firme la decisión; como agencias en derecho se fija la suma de un millón de pesos (\$1.000.000) a favor de la AFP. Demandada”.

### RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación respecto a la decisión de condenar a dicha parte y al apoderado Francisco a pagar las costas procesales por la prosperidad de la excepción previa indicando no estar de acuerdo con las consideraciones expuestas por el juez de instancia toda vez indica que el despacho desconoce el artículo 48 del decreto 3798 del 93 modificado por el artículo 20 del decreto 1513 del 98 el cual en el literal b dice que la AFP a la cual está afiliado el trabajador respecto a los bonos pensionales corresponde a las entidades administradoras adelantar por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para este las acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales y pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su redención, los afiliados deberán suministrar a las administradoras la información que sea necesaria y que se encuentre a su alcance para tramitar las solicitudes. en todo caso las administradoras están facultadas para solicitar la certificación es que resulten necesarias las cuales son obligatorias expedición por parte de los destinatarios de estas solicitudes

Que por lo anterior en este caso teniendo en cuenta que en el expediente obran las respectivas certificaciones tanto del Inpec como de municipio los cuales obran a folios 39-41, 44 y 49 en el presente proceso no se están discutiendo las relaciones laborales o si realmente tiene que pagarlo, por cuánto las entidades empleadoras en este caso expiden los certificados laborales y es al ministerio y a la nación a quién corresponde dar la autorización del pago de los mismos y que por lo tanto no es obligatorio realizar reclamación administrativa y si bien tampoco son necesarios los litisconsorcio en este proceso dicho apoderado no se opone a su integración para que el proceso avance pero se opone a la condena en costas, más cuando las excepciones previas tienen una finalidad y es sanear el proceso para que no

se produzcan sentencias inhibitorias y en el presente caso el despacho condena de manera injusta y ni siquiera objetiva a la demandante a las costas procesales. Por lo anterior solicita sea revocada la condena en costas impuestas a la parte demandante por la prosperidad de la excepción previa propuesta por la demandada.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Las partes no presentan alegatos de conclusión.

### **CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Para resolver, es de resaltar que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el Artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los Artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los Artículos 65 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente, entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más en la primera instancia.

Se centra el problema jurídico en determinar si debe o no condenarse en costas a la parte demandante por la prosperidad de la excepción previa de falta de integración de litisconsorte necesario.

Por su parte se tiene que el a quo consideró necesaria la integración al proceso en calidad de litisconsorte necesario de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del C.G.P, a la Nación- Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del municipio de Santo Domingo y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, precisando que la comparecencia de dichas entidades eran necesaria al proceso para el pago de la devolución de saldos pretendida por la parte demandante.

En orden de lo anterior debe decirse que el artículo 48 del decreto 1748 de 1995, por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los bonos pensionales, establece en su artículo 48 lo siguiente:

Artículo 48. ENTIDADES ADMINISTRADORAS. Modificado por el art. 20, Decreto Nacional 1513 de 1998. Son entidades administradoras:  
a) El ISS respecto a los bonos tipo B.  
b) La AFP a la cual esté afiliado el trabajador, respecto a los bonos tipo A.

Corresponde a las entidades administradoras **adelantar, por cuenta del afiliado, pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su redención.** Los afiliados deberán suministrar a las administradoras la información que sea necesaria y que se encuentre a su alcance para tramitar las solicitudes.

En todo caso, las administradoras están facultadas para solicitar las certificaciones que resulten necesarias, las cuales son de obligatoria expedición por parte de los destinatarios de estas solicitudes.

No obstante, lo anterior, el emisor también podrá solicitar directamente las certificaciones necesarias.

Los empleadores requeridos por una entidad administradora o por un emisor para suministrar información, deberán hacerlo en un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de dicho requerimiento, so pena de las sanciones civiles y administrativas a que haya lugar.

Las entidades administradoras quedan eximidas de allegar certificaciones, y el empleador de suministrarlas individualmente, cuando el bono vaya a ser calculado por la OBP, siempre que la información esté incluida en el último Archivo Laboral Masivo que se haya entregado a esta Oficina, salvo cuando el trabajador solicite expresamente una certificación individual más amplia”.

Ahora, en lo que respecta concretamente a la condena en costas para el asunto bajo estudio establece el artículo 365 del C.G.P lo siguiente:

“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

**Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe”.**

Partiendo de la normativa en cita considera la Sala que la parte demandante no debe ser condenada en costas ante la prosperidad de la excepción previa propuesta por la demandada Colfondos S.A, toda vez que para el caso bajo estudio es a las administradoras de fondos de pensiones a las que les corresponde en los términos del artículo 48 del decreto 1748 de 1995, **adelantar, por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para éste,** las acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su redención, por

lo que de acuerdo a las pretensiones formuladas en la demanda le correspondería al a quo determinar si le asiste o no el derecho a la devolución de saldos con la inclusión de los tiempos laborados para el servicio del Inpec y del municipio de Santo Domingo, pues es claro que las acciones y tramites administrativos para el pago de los bonos pensionales debe ser tramitado a través de la AFP correspondiente a la cual se encuentre vinculado el afiliado.

Al margen de lo anterior, se precisa igualmente que de lo acaecido dentro del proceso no se observa ni se evidencia mala fe de la parte demandante en pretender como lo argumenta la a quo, ahorrarse el trámite de las reclamaciones administrativas contra las entidades que a juicio del despacho se ordenó vincular en calidad de litisconsorte necesario, pues como se anotó es a la AFP a quien le corresponde realizar todos los trámites respectivos para la expedición y pago de los respectivos bonos pensionales ante las entidades emisoras y pagadoras del mismo cuando se demuestre tener derecho a ello.

Además de lo anterior es necesario precisar que el espíritu o finalidad del artículo 365 del C.G.P cuando establece que debe ser condenado en costas a quien se le resuelta desfavorablemente **la formulación** de una excepción previa, es precisamente que sea condenado en costas a quien formula la misma y haga mal uso o de forma innecesaria de tal mecanismo de excepción, pero no que sea condenado en costas a la parte contraria contra quien se aduce la excepción.

Por lo anterior lo legal y pertinente será REVOCAR la providencia de primera instancia emitida el 24 de junio de 2022, que condenó en costas a la parte demandante por la prosperidad de la excepción previa propuesta por Colfondos S.A para en su lugar ABSOLVER de dicha condena.

Sin costas en esta instancia.

### **EL FALLO DEL TRIBUNAL**

En mérito de lo expuesto y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, RESUELVE:

**PRIMERO: REVOCAR** la providencia impugnada de fecha y origen conocidos, proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, en lo atinente

a la condena en costas a la parte demandante por la prosperidad de la excepción previa propuesta por Colfondos S.A para en su lugar ABSOLVER de dicha condena, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, devuélvase el expediente al Juzgado de procedencia.

**TERCERO:** Sin costas en esta instancia.

**CUARTO:** La presente decisión se notificará por ESTADOS.

Los Magistrados,



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 148 del 23 de agosto de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>